

El trabajo de J. Van den Broeck consiste, en efecto, en actualizar todo el Derecho de religiosos siguiendo el patrón que marcan los cánones del Codex. El método que sigue el autor es el siguiente: En primer lugar transcribe el canon del Codex. Si éste no ha sufrido ninguna modificación por medio de la legislación posconciliar, se añade seguidamente una nota explicativa donde se da cuenta del dato de su vigencia actual y se remite al lector a los Documentos conciliares o postconciliares que tratan el tema y a los autores que lo han abordado en sus trabajos teológicos o canónicos. Cuando a juicio del autor, el texto del canon correspondiente ha sufrido alguna modificación, el texto del Código y el texto modificado se transcriben a doble columna; en una se transcribe íntegramente el texto codicial y en la otra el texto modificado y en los términos que el autor aprecia que ha sido modificado.

Cuando en el texto modificado, el autor cree que se deben omitir palabras del canon antiguo, lo señala con el signo (...). Cuando se trata de una corrección del texto antiguo, lo hace en letras cursivas; y si introduce un texto nuevo, lo transcribe con caracteres gruesos. En el último supuesto de que un canon haya sido totalmente derogado, o derogado en alguno de sus párrafos, transcribe íntegramente el texto antiguo y derogado en una columna, y en la otra el signo de las omisiones (...) a que antes nos referíamos. En todos los casos, los cánones van seguidos de la correspondiente nota explicativa en donde da razón de las modificaciones introducidas y de los Documentos en que se contienen, así como de la bibliografía sobre el tema; bibliografía que no recoge a pie de página, sino al final del libro y que constituye uno de los aspectos positivos del trabajo, pues ofrece al lector la posibilidad de profundizar en cada uno de los temas, facilitándole el acceso a los libros y artículos más recientes a los que va remitiendo al filo de cada una de las notas explicativas. Advertida también el lector que la mencionada y rica bibliografía no es un elenco genérico de libros y artículos de revistas, sino 118 notas que remiten al lugar preciso con sus correspondientes páginas.

Estamos seguros que el trabajo paciente de J. Van den Broeck tendrá buena acogida entre los lectores que se sientan interesados por los temas del Derecho de religiosos. El trabajo no tiene otra pretensión que facilitar el conocimiento de la nueva legislación, como ya lo han pretendido otros autores. La novedad estriba en el método elegido, consistente en contrastar cada uno de los cánones del Código con la normativa más reciente e introducir en los mismos las modificaciones que el autor juzga pertinentes. Como es obvio —y el propio autor lo hace notar— los respectivos cánones en su nueva redacción tienen sólo un valor relativo y necesariamente incompleto por ser obra de un autor privado y no del legislador; pero ilustran al lector y le precisan el alcance de las reformas recientemente introducidas. Se trata, en suma, de un trabajo predo-

minantemente práctico, muy útil para la consulta de los que han de enseñar o aplicar hoy el Derecho de religiosos.

TOMAS RINCON

PODER JURISDICCIONAL Y FUNCION DE JUSTICIA

CARMELO DE DIEGO-LORA, *Poder jurisdiccional y función de justicia en la Iglesia*, EUNSA, Pamplona 1976, 184 págs.

En la vida de la Iglesia, la función judicial es parte de la misión pastoral que Cristo ha confiado al Romano Pontífice y a los obispos. Sin menoscabo de esa unidad radical de poder, se ha verificado una parcial desconcentración orgánica, y los autores admiten una distinción de funciones; especialmente han dedicado abundante literatura a la distinción entre la administrativa y la judicial.

En un momento histórico —a partir de Sixto V— se produce un gradual empobrecimiento de la función judicial y una disminución de su competencia. Se inicia el fenómeno con la creación de las Sagradas Congregaciones, que gozan de inmunidad frente a los jueces y que incluso los sustituyen resolviendo —especialmente la S. C. del Concilio— muchas causas de naturaleza judicial.

Ese fenómeno culmina con la reforma piobenedictina, que sustrae de la competencia judicial los conflictos acerca de los actos administrativos de los obispos. De nada sirve en la práctica el intento de devolver a los tribunales ordinarios aquellas cuestiones que requieren un proceso, pues, una vez que la Administración ha intervenido en ellas, sólo puede seguirse el conflicto en vía administrativa. Resulta ya un tópico afirmar que los tribunales ordinarios se han convertido casi exclusivamente en jueces para las causas matrimoniales.

El problema capital consiste en determinar cuáles son las materias judiciales, aquellas ante las que debe inhibirse la Administración. Dentro de la variada gama de soluciones ofrecidas por la doctrina, el autor de esta obra, profesor ordinario de Derecho procesal canónico en la Universidad de Navarra, fija su atención sobre lo característico de lo judicial: el proceso, que es el enfrentamiento formal de las partes ante un juez independiente, que debe decidir la causa. Al juez corresponde conocer, mediante el proceso, aquellos enfrentamientos que se presentan en el mundo de la realidad jurídica material —e incluso en el de una posible realidad jurídica procesal antecedente— y resultan insolubles para los interesados, sea porque su objeto

ha escapado de la esfera de disposición de éstos, o porque estando en ella ha quedado eliminada toda posibilidad de acuerdo, sea porque el imperio de la ley imposibilita toda disponibilidad. Y la acción judicial será, para el autor, el derecho-poder que sirve en su ejercicio a la tarea de trasplantar, dicha situación de enfrentamiento antecedente, al proceso, convirtiéndola en enfrentamiento formal de partes en condiciones de igualdad y con **sometimiento** al órgano de justicia para su decisión.

A partir de esta concepción, analiza el autor las diversas opiniones favorables o adversas a una justicia administrativa en la Iglesia, los precedentes rotales y la solución que el problema da la Const. **Regimini Ecclesiae universae** de 1967. Concibe el proceso administrativo como consecuencia del ejercicio de una acción, con el fin de que la Sección segunda de la Signatura Apostólica no sólo atienda a la legalidad del acto administrativo, sino que también aplique criterios de justicia a las relaciones sustanciales que le preceden, entre la Administración y los administrados.

Se trata, sin duda, de una aportación interesante al tema de la justicia administrativa, que proviene de quien, a sus conocimientos doctrinales, aúna su experiencia en el campo de la magistratura civil. Es una interpretación de la nueva institución que hacemos nuestra, aunque con el temor —no carente de fundamento— de que en algunos sectores no se entienda así. El problema del alcance de la justicia administrativa eclesiástica subsistirá, mientras no veamos con claridad cuáles son los poderes de conocimiento y decisión que, en la práctica jurisprudencial, se consideran atribuidos al juez administrativo.

En definitiva, como De Diego-Lora sostiene, la función de justicia administrativa no es más que un aspecto de la total función de justicia en la Iglesia. En efecto —afirma el autor—, no sólo la **res administrativa**, sino toda situación susceptible de tratamiento jurídico, puede, en la sociedad eclesiástica, transformarse en **res iudicialis**, en cuanto se hace situación de enfrentamiento insoluble; y se la somete —por el ejercicio de la acción judicial— a tratamiento procesal.

EDUARDO LABANDEIRA

DERECHO MATRIMONIAL Y PROCESAL CANONICO

VARIOS, **Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro**, 1 vol. de 267 págs. Ed. Universidad Pontificia, Salamanca, 1975.

El título mismo de la obra publicada informa del objetivo que con ella se pretende. Procede esta publi-

cación de un Curso, organizado conjuntamente por la Junta de Gobierno del I. Colegio de Abogados de Valladolid y el Provisorato de aquella Archidiócesis, dirigido a profesionales del foro a fin de proporcionarles, junto a la formación de Derecho secular que poseen, la preparación canónica «requerida para conducir con buen éxito las difíciles causas de separación y sobre todo de nulidad de matrimonio». Así reza la **Presentación** del libro. Dictadas estas lecciones y grabadas en su momento, luego fueron corregidas y retocadas por sus autores, se aclara.

Así se pone de relieve la primera característica del conjunto publicado: el de ser exposiciones variadas sobre diversas parcelas del Derecho Canónico relativo al matrimonio; no se trata, pues, de una obra de investigación científica, sino de enseñanza ilustrativa. En segundo lugar, que no estamos en presencia, pues, de una obra de autor, sino de una suma de autores, lo que permite alguna vez —Vid la lección de L. de Echeverría en pp. 218-222, y la de F. Crespo Cedrún, en pp. 230-237— reiteraciones, aunque sean mínimas y se traten los temas con diversa perspectiva y extensión. Tercera, a la obra editada se la presenta con una cierta sistemática, pero lógico es que ofrezca lagunas importantes. Cuarta, no todos los trabajos merecen, como resulta natural dado sus variados autores, idéntica valoración. Quinta, pensamos que es un instrumento útil para abogados que, con su peculiar formación jurídica-civil, se dediquen también a desarrollar su trabajo profesional en el foro eclesiástico, con lo que opinamos que la finalidad perseguida por la publicación se consigue. Sexta, se ha conseguido también una cierta proporción entre las extensiones de los diversos trabajos y una medida distribución —casi a partes iguales— entre los que serían temas del llamado derecho matrimonial, según el título del libro, y los temas de estricto derecho procesal; se le ha añadido una lección última —para que la exposición resulte completa— de L. de Echeverría sobre «Aspectos morales de las causas matrimoniales». Y séptima, se ha procurado traer a la publicación los temas actualmente más en boga relativos a causas de nulidad —como los de las anomalías psico-sexuales y los de la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio—, a cargo estos temas, respectivamente, de José María Serrano y Eudoxio Castañeda, tratando éste, con carácter general, el de los estados demenciales como vicio de consentimiento. También, en este apartado, habrá que comprender las lecciones de L. del Amo sobre nulidad de matrimonio bajo condición y el de J. Rodríguez González sobre miedo grave.

Habida cuenta de que, dentro de los márgenes de una recensión, no resulta posible entrar a enjuiciar detenidamente cada una de las lecciones publicadas, dado además, que la diversidad de sus autores aportan a cada lección su propia concepción, y exigiría de una crítica de talante también diverso para cada uno de ellos, parece suficiente proceder a una relación quin-